

## DECRETO N° 120/14

### VISTO :

La resolución N° 3020/14, dictada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Capilla del Monte, en su sesión de fecha 7 de agosto de 2014, a través de la cual rechazó por ilegales e inconstitucionales los decretos 158/11, 110/12 y 210/12 de "Prohibición de emisión de estados de deuda".

### Y CONSIDERANDO:

Que en el año 2009 se dictó la Ordenanza Municipal N° 2249/09, Ordenanza General Impositiva para la Ciudad de Capilla del Monte, entrando en vigencia a partir del año 2010, prorrogada sucesivamente durante los años 2011, 2012, 2013 y el año en curso.

Que el Intendente Municipal, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 258° de la Ordenanza General Impositiva<sup>1</sup>, que expresamente dice que: *"El D.E. si lo considera pertinente, reglamentará por Decreto los aspectos necesarios de esta Ordenanza, y en particular lo relativo a la confirmación de la Administración Fiscal; caso contrario, la responsabilidad de las actuaciones que esta Ordenanza atribuye a la Administración Fiscal será íntegramente asumida por el Departamento Ejecutivo Municipal"*, dictó el decreto N° 158/11 y sus modificatorios.

Que el fin público perseguido con el dictado de aquél decreto, está vinculado con la situación imperante tanto en la localidad de Capilla del Monte, como en todo el corredor de las Sierras Chicas, en las que la usurpación de tierras, tanto públicas como privadas, ha devenido en un problema mayúsculo que requiere de la atención de los funcionarios de turno.<sup>2</sup>

Que nuestra localidad no ha sido ajena a la problemática que se pretende limitar a través de los decretos dictados cuyo objetivo ha sido y es el de limitar la proliferación de ocupaciones, las construcciones hechas fuera de las normas de uso y ocupación del suelo vigente, realizadas sin planos previamente aprobados y por ello sin fiscalización, y que generan finalmente un sin número de conflictos planteados en los mismos despachos municipales por propietarios registrales que ven frustrados sus derechos frente al avasallamiento de los ocupantes de hecho, así como de los compradores de derechos posesorios inexistentes y que son engañados en su buena fe.

Es decir, el fin perseguido por los Decretos hoy declarados ilegales e inconstitucionales por el Concejo Deliberante, es ni más ni menos que proteger el patrimonio y la propiedad de particulares, y que, por más que no ejerzan su *animus domini* sobre sus lotes y/o terrenos, ello no implica que la administración no pueda limitar la práctica y el accionar de terceros inescrupulosos, restringiendo la emisión de estados de deuda.

En este marco, los decretos puestos en crisis por el Concejo Deliberante, protegen justamente a propietarios legítimos, que, tal como expusimos, si bien es cierto que en algún caso pudieran no ejercer de modo activo el dominio sobre los mismos, de ninguna manera se puede, tal como pretende el Concejo Deliberante, apañar a inescrupulosos que a sabiendas de la situación existente, se apropian de lo ajeno.

Que la situación descripta, es también compartida por el Concejo Deliberante, tal como surge de los considerandos de la resolución N° 3020/14, pero yerran justamente en lo referente a los "pagos" y a la prelación normativa. Que en este marco, cabe justamente aplicar el derecho público, no lo que dispone el código civil, conforme demostraremos.

---

<sup>1</sup> Ordenanza N° 2249/09, prorrogada para el año en curso.

<sup>2</sup> Ver a modo ejemplificativo <http://cadena3.com.ar/contenido/2013/12/16/122855.asp>

Que en cuanto a la prelación de normas, cabe efectuar las siguientes valoraciones. En primer lugar, y siguiendo a Spisso, *el Derecho Constitucional Tributario es el conjunto de principios y normas constitucionales que gobiernan la tributación. Es la parte del derecho constitucional que regula el fenómeno financiero que se produce con motivo de detracciones de riqueza de los particulares a favor del Estado, impuestas coactivamente, que hacen a la subsistencia de éste, que la Constitución organiza, y al orden, gobierno y permanencia de la sociedad cuya viabilidad ella procura. En el quedan comprendidas diversas materias referentes a: a) asignación de competencias en el ejercicio del poder tributario... e) garantías que aseguren la efectiva vigencia de los derechos de los contribuyentes.*<sup>3</sup>

Luego el mismo autor dice: *“Este conjunto de materias son parte del derecho constitucional, de índole tributaria, por el objeto que comprende, que se integran en él, pues su finalidad es la de disciplinar la soberanía del Estado en el ejercicio del poder tributario, delimitar su contenido y alcance y regular los derechos y garantías de los contribuyentes.”*<sup>4</sup>

Por otra parte, el Código Tributario Provincial, dice en su artículo 1º lo siguiente: *Ámbito de Aplicación - Aplicación Supletoria. Artículo 1.- Los tributos que establezca la Provincia de Córdoba se rigen por las disposiciones de este Código y Leyes Tributarias Especiales. Las disposiciones contenidas en el Libro Primero de este Código se aplicarán supletoriamente a las Leyes Tributarias Especiales.”*

A su vez, la Ordenanza vigente en el Municipio expresamente dice: *“Artículo 2º.-: Cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de los ordenamientos legales citados en el artículo anterior, deberá recurrirse en el orden que se enumeran, a los principios del derecho tributario y a los principios generales del derecho.-*

Es decir, y en relación a las normas a considerar, tanto como sucede en la Provincia de Córdoba, como en este Municipio, se aplican obviamente normas de tributarias o de derecho público.

En lo que respecta a quién es denominado contribuyente y obligado al pago, la misma ordenanza municipal afirma que: *“Artículo 5º.-: Están obligados a pagar los impuestos, tasas y contribuciones en la forma establecida en la presente Ordenanza, en la Ordenanza Tarifaria Anual y Ordenanzas Especiales, personalmente o por intermedio de sus representantes legales, los Contribuyentes y sus herederos, según las disposiciones del Código Civil.- Están asimismo obligados del pago las personas que administren o dispongan de los bienes de los contribuyentes y todos aquellos designados como Agentes de Retención-”*

Asimismo, el Código Tributario Provincial dice: “ *Sujetos Pasivos – Enumeración .Artículo 29.- Son contribuyentes en tanto se verifiquen a su respecto el hecho generador de la obligación tributaria previsto en este Código o Leyes Tributarias Especiales, los siguientes: Las personas de existencia visible, capaces o incapaces, según el derecho privado. Artículo 30.- Los contribuyentes, conforme a las disposiciones de este Código o Leyes Tributarias Especiales, y sus herederos de acuerdo al Código Civil están obligados a pagar los tributos en la forma y oportunidad debidas, personalmente o por intermedio de sus representantes voluntarios o legales y a cumplir con los deberes formales establecidos en este Código o en Leyes Tributarias Especiales”.*

---

<sup>3</sup> SPISSO, Rodolfo R., Derecho Constitucional Tributario, Ed. Depalma, Buenos Aires, Año 1993, pág. 1

<sup>4</sup> Idem anterior, pág. 1.

En síntesis, las normas aplicables en lo referente a los pagos, son de derecho público y, sobre esa base, los contribuyentes deben pagar personalmente o por intermedio de sus representantes voluntarios o legales, por lo que de ninguna manera podrían pagar usurpadores, sin legitimación alguna, y muchos menos que se les expidan estados de deuda, tal como propone el DEM, por lo que corresponde vetar el proyecto enviado por el Concejo Deliberante ya que, más allá de lo expuesto, lo que persiguen los decretos cuestionados es resguardar el bienestar general.

Sobre el mismo, la CSJN tiene dicho que: *“El preámbulo es el resumen de todo el contenido de la Constitución, puesto para asegurar y fijar la inteligencia e interpretación de sus disposiciones, que si bien son parte de aquella, operan como fines que determinaron su adopción”*.<sup>5</sup>

También afirmó en autos: *“Avico c/ De la Pesa”*<sup>6</sup> que: *“Las grandes metas de la política del Estado están fijadas en el Preámbulo de la Constitución y la acción del poder político estatal para lograr esas metas no es revisable judicialmente en cuanto decisión política; pero como ésta, necesariamente, debe instrumentarse mediante normas jurídicas -"ubi societas ibi ius"”*.

Es decir, promover el bienestar general es el valor síntesis, el valor que justifica la existencia del estado. Todo su accionar debe encontrarse enderezado a satisfacer el bien común que, como dice Sagües: es lo que legitima al Estado y da justo título de mando.

En cuanto al bienestar general, el máximo Tribunal afirma que: *“Esta Corte ha sostenido desde largo tiempo que el poder de promover el bienestar general es inherente al gobierno. Este poder lo tienen el Gobierno Federal y también los gobiernos estaduales en su capacidad soberana, relativa a todos los asuntos sometidos a su jurisdicción (9 Wall, 41; 114, U.S. 196) y no ha sido cedido al Gobierno Federal, como lo demuestran las citas hechas antes. Estos derechos correlativos, el del ciudadano a ejercer exclusivo señorío sobre su propiedad y de contratar libremente sobre sus negocios, y el del Estado de regular el uso de la propiedad y la dirección de los negocios siempre están en colisión (u oposición). No puede imaginarse ejercicio alguno del derecho individual que, en algún aspecto, y como quiera que sea leve, no afecta a la comunidad (o al público); ni el ejercicio de la facultad legislativa para regular la dirección de los ciudadanos, que en alguna extensión no cercene la libertad o afecte la propiedad. Pero solamente supeditado a la restricción constitucional el derecho individual debe ceder (o rendirse) a las exigencias públicas”*.<sup>7</sup>

Desde otra perspectiva, es más que llamativa la resolución emanada del órgano deliberativo, ya que intenta justificar y facilitar el pago de contribuciones y tasas a aquellos que usurpan y atentan contra el derecho a la propiedad de vecinos de esta ciudad, máxime cuando los decretos cuestionados de ninguna manera agravan o generan perjuicios a particulares.

En otros términos, corresponde vetar la resolución 3020/14, ya que la misma no cumple con la razonabilidad que requiere el actuar de la administración, prevista en el artículo 28 de la Constitución Nacional.

En conclusión, y siendo en la actualidad el titular del DEM el responsable, junto con el Concejo Deliberante, del actuar de los particulares, es que en uso de las atribuciones conferidas por la ley orgánica municipal, y por razones que atentan al bienestar general, como así también a la convivencia armónica de esta Ciudad, corresponde vetar la resolución 3020/14.

Que promover el bienestar general: es el valor síntesis, el valor que justifica la existencia del estado. Todo su accionar debe encontrarse enderezado a satisfacer el bien común que, como dice Sagües: es lo que legitima al Estado y da justo título de mando

---

<sup>5</sup> Ver Fallos CSJN 307:326

<sup>6</sup> Ver Fallos CSJN 172:21

<sup>7</sup> Ver Fallos Idem anterior

Es decir, el proyecto de ordenanza no tuvo en consideración toda la legislación vigente en el ámbito municipal, por lo que considero que debe ser vetado.

Que la Ley Orgánica Municipal faculta al Departamento Ejecutivo a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ordenanza sancionado por el Concejo Deliberante expresando sus fundamentos;

Que dicha atribución examinadora del Departamento Ejecutivo comprende la evaluación de los aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo este un verdadero control de legalidad y razonabilidad;

Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto establecido por el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal.

Por ello, en uso de atribuciones constitucionales que le son propias, el Intendente de la ciudad de Capilla del Monte

#### D E C R E T A

**Artículo 1°.-** VETASE el Proyecto sancionado con fuerza de Ordenanza por el Concejo Deliberante de Capilla del Monte, mediante Resolución N° 3020/14 dada en la sala de sesiones a los 7 días del mes agosto de 2014, por las razones expuestas.

Artículo 2°.-: VUELVA al Concejo Deliberante de acuerdo a lo establecido en el Artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal N° 8102.-

Artículo 3°.-: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Capilla del Monte.-

Artículo 4°.-: COMUNIQUESE, córrase vista al Tribunal de Cuentas, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

Capilla del Monte, 25 de agosto de 2014.-

Firmado: OSVALDO MARQUES  
SEC. GOB.

GUSTAVO A. SEZ  
INTENDENTE MUNICIPAL